Declaración del Consejo Regional Paneuropeo (PERC) de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre la crisis del COVID-19, 1 de abril de 2020

La crisis mundial de la COVID-19 ha afectado a todo el continente europeo. Millones de personas están o estarán infectadas. Severas restricciones a la libertad de movimiento y en el mercado laboral han llevado a la pérdida de empleos y a la quiebra de empresas.

Décadas de reformas estructurales, agravadas por la austeridad, han dejado a los sistemas de salud pública y de protección social de muchos países en una situación difícil. En los peores casos, como en Georgia, donde la atención sanitaria ha sido completamente privatizada, el Estado se ve como rehén de la asistencia sanitaria privada; tiene que pagar enormes cantidades de dinero al sector privado para hacer frente a los desafíos preventivos o actuales. Los bajos salarios y la inseguridad en el empleo han llevado a muchas personas a elegir entre propagar la enfermedad o luchar contra la pobreza.

A largo plazo, tenemos que aprovechar las lecciones de la crisis financiera mundial. Tenemos que acabar con el neoliberalismo, las reformas estructurales y la austeridad. Necesitamos democracias que antepongan las personas a todo lo demás. Reclamamos un nuevo contrato social, con una red de seguridad universal de derechos laborales, salarios dignos y protección social para todos los trabajadores y trabajadoras, y servicios públicos adecuadamente financiados, incluida la asistencia sanitaria para todos, gratuita en caso de necesidad.

De momento, gran parte de Europa está bloqueada. Los gobiernos nacionales han adoptado -a veces tardíamente- medidas estrictas, cerrando fronteras y fábricas, suspendiendo las actividades culturales y deportivas y cerrando escuelas. Si bien son necesarias, estas medidas tienen repercusiones a corto plazo en los salarios de los trabajadores y trabajadoras y tendrán un impacto a más largo plazo en las economías y en la sociedad.

A muchos trabajadores se les pide que se queden en casa y muchos, especialmente las mujeres, necesitan cuidar de los niños que no están en el colegio, lo que supone una prolongación del trabajo de cuidadora no remunerado relacionado con la pandemia. Algunos pueden trabajar a distancia, otros se benefician de la cobertura de protección social o de planes de empleo a tiempo parcial. Muchos otros son simplemente despedidos o se quedan sin ingresos para mantener a sus familias o para pagar la vivienda o los servicios municipales.

Las mujeres corren un mayor riesgo de sufrir abusos domésticos, y los trabajadores migrantes y los refugiados se enfrentan al doble reto de perder sus ingresos y no poder

regresar a sus hogares. Los trabajadores y trabajadoras de la salud -desproporcionalmente mujeres- están sobrecargados de trabajo y corren un mayor riesgo de exposición, con un equipamiento de protección personal insuficiente. Muchos otros trabajadores de la distribución, la venta al por menor y los servicios de emergencia –de nuevo desproporcionadamente mujeres- también están en riesgo y merecen nuestro reconocimiento.

Los países con economías desarrolladas e inclusivas, incluso aquellos que se han enfrentado a los desafíos de las reformas estructurales y la austeridad, han sido capaces de adoptar estímulos económicos, inyectar dinero en los servicios de salud y mantener los salarios, en particular en la Europa del norte y occidental. Presionados por los sindicatos o en colaboración con ellos, algunos países han concedido subsidios adicionales por enfermedad, subsidios salariales a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, trabajo a jornada reducida e incluso ayudas para la hipoteca y el alquiler. Otros países han prestado apoyo a las empresas mediante subsidios y rebajas fiscales y préstamos más baratos.

Pero muchos países de Europa están demasiado endeudados, su protección social y el sector público no cuentan con financiación suficiente, el empleo precario y la pobreza generalizada están muy extendidos, y la negociación colectiva y el diálogo social no están suficientemente desarrollados. Esos países no se resignarán a hacer frente a los efectos de la COVID-19.

Y mientras que hay empresas responsables en Europa y en el mundo que entienden la necesidad de las mascarillas antivirus y la necesidad de sostener las economías, de apoyar a las sociedades y a los ciudadanos y de contribuir a la recuperación, también hay muchos empresarios codiciosos que se desentienden y se hacen cargo simplemente despidiendo a la gente, obligando a los trabajadores a trabajar en condiciones inseguras o proponiendo la suspensión de los derechos laborales. En Croacia, los sindicatos han luchado con éxito contra estas propuestas hipócritas y desaprensivas, pero necesitamos permanecer vigilantes y mostrarnos solidarios en caso de que se produzcan nuevos ataques. En Polonia, el proyecto de ley recientemente aprobado para hacer frente a la crisis de la COVID-19 introdujo regulaciones que no están relacionadas con la crisis, sino que tienen por objeto limitar el diálogo social e interferir en la autonomía de los interlocutores sociales.

La crisis mundial de la COVID19 requiere una respuesta global. Si bien hay ciertas señales positivas del G20 y del FMI, hasta el momento ni siquiera la Unión Europea ha logrado adoptar un enfoque suficientemente coordinado.

El Consejo Regional Paneuropeo, que representa a organizaciones sindicales desde Reikiavik hasta el Vladivostok, reafirma la unidad del movimiento sindical europeo, reitera el llamamiento a la solidaridad frente a la crisis sanitaria, económica y humanitaria que asola el continente y exige esfuerzos coordinados y sólidos a las autoridades nacionales y multilaterales, a las empresas y a los sindicatos.

Hacemos un llamamiento a los gobiernos nacionales para:

- contener la propagación de la enfermedad, respetando las libertades fundamentales, especialmente cuando las presiones sociales aumentan;
- proporcionar más y más adecuado apoyo a los servicios de salud y a todas las mujeres y hombres que están en primera línea;
- garantizar el apoyo de la asistencia sanitaria accesible a todas las personas ahora y en el futuro;

- introducir paquetes económicos a través del diálogo social para prevenir la quiebra de empresas y el desempleo, mantener los niveles de ingresos de todos los trabajadores, apoyar y ampliar los sistemas de protección social y desarrollar la protección del empleo temporal para permitir que todos los trabajadores, incluidos los que tienen empleos atípicos y precarios, estén protegidos de forma adecuada;
- en particular, proporcionar ingresos dignos a los empleados, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores de plataformas, la prestación por enfermedad desde el primer día y la ayuda para hacer frente a los gastos de vivienda;
- garantizar las cadenas de suministro vitales manteniendo abiertas las fronteras para la circulación de mercancías y suministros y proporcionando al mismo tiempo una protección adecuada a los trabajadores del transporte;
- prestar especial atención a las necesidades de las mujeres que se enfrentan a mayores riesgos de violencia doméstica; y
- respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes permitiéndoles permanecer en sus países de acogida y tratarlos como ciudadanos nacionales en lo que respecta al acceso a todos los derechos sociales y laborales.

Llamamos a las autoridades internacionales, incluyendo a la Unión Europea y a las Instituciones financieras Internacionales, a:

- cooperar en las medidas necesarias para frenar la enfermedad, incluido el intercambio de información, conocimientos médicos, tecnología y suministros, y equipo de protección personal;
- ampliar el apoyo financiero a las economías que lo necesiten sin condiciones, pero que utilizarán esos recursos para financiar los servicios de salud pública y el apoyo a los ingresos de los trabajadores;
- inyectar dinero suficiente en la economía mundial para sostener la demanda y la oferta; y
- trabajar con los interlocutores sociales para garantizar que las medidas adoptadas respondan a las necesidades de los trabajadores y las empresas de todos los tamaños.

Hacemos un llamamiento a las empresas y a los empleadores para:

- trabajar con los sindicatos para garantizar que se mantengan los derechos y los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras y los empleos, independientemente del tipo y forma de empleo, incluidos aquellos con contratos precarios;
- apoyar la lucha contra la enfermedad modificando la producción donde sea posible para producir equipos de protección médica y personal;
- dejar de presionar para una reducción o disminución de la protección del empleo;
- facilitar a los trabajadores equipos de protección personal y otras medidas que reduzcan la propagación del virus en el lugar de trabajo; y
- permitir una mejor cooperación con los sindicatos a nivel de las fábricas para proteger a los trabajadores y las trabajadoras.